

Crónica del mes

Enero-febrero

La sociedad salvadoreña inició el 2003 encaminándose hacia los comicios del 16 de marzo y la negociación de un Tratado de Libre Comercio entre los países centroamericanos y Estados Unidos, asuntos que, sin lugar a dudas, serán de gran trascendencia para El Salvador durante todo el año. De tal suerte que, desde finales de 2002, se fue configurando un entorno sociopolítico propicio para la discusión de los temas arriba señalados, lo cual no significa necesariamente que todos los sectores sociales hayan tenido cabida en los foros, debates y espacios públicos surgidos para discutirlos. Otras cuestiones de interés nacional —por muy urgentes que fueran, como el de la reforma de la salud, la reforma educativa y el combate de la pobreza, por ejemplo— se dejaron al margen o se subordinaron a los temas predominantes en la agenda nacional impuesta por los sectores más pudientes: el político y el económico. Estos sectores empezaron a definir la agenda del país partiendo de un optimismo liderado por el Ejecutivo y la gran empresa privada —y alimentado por las empresas mediáticas de derecha—, en contraste con el desencanto de la mayoría de la población respecto de la manera en que se ha conducido el país.

Con todo, los estrategias oficiales y empresariales encontraron un nuevo impulso luego de que Naciones Unidas anunciaran en diciembre pasado el finiquito del proceso de verificación de los acuerdos de paz en El Salvador. En el país, la noticia se dio a conocer en enero. Y es que desde los primeros días del año, la prensa nacional se dio a la tarea de interpretar la decisión de la ONU y el mensaje del Secretario General de ese organismo, Kofi Annan, como un descomunal logro de las principales instituciones estatales salvadoreñas, obviando deliberadamente cualquier indicio que indicara estancamiento o retroceso en la transición democrá-

tica. Uno de los rotativos nacionales se limitó a informar que el único tema que ponía en duda el cumplimiento de los acuerdos era el referente a los lisiados de guerra. Instituciones como la Policía Nacional Civil no desperdiciaron la oportunidad para vanagloriarse.

No obstante, el informe de la Organización de las Naciones Unidas ha ilustrado una realidad que más bien ha tendido a ser negada por el discurso oficial: “Aún queda mucho por hacer para lograr la plena democratización, el imperio de la ley efectivo, una sociedad equitativa y la firme consolidación de la paz que tanto costó conseguir. El Salvador atraviesa una transición delicada hacia la integración regional y hemisférica con instituciones aún frágiles, una cultura política endeble y amplias desigualdades socioeconómicas. La polarización, la profunda desconfianza y los enfrentamientos verbales entre rivales caracterizan el ámbito político. Esas actitudes suelen prevalecer sobre la voluntad de entablar deliberaciones serias y constructivas sobre propuestas sustantivas para afrontar los muchos retos que han de presentarse”. Y el informe del Secretario General prosigue: “Las autoridades no tienen la costumbre de someter a consulta las decisiones normativas fundamentales a nivel social o político, o suelen hacer caso omiso de los resultados de esas consultas”. El papel del gobierno en la resolución de los conflictos surgidos al inicio del mes confirmó, precisamente, las palabras de Kofi Annan.

El 8 de enero, Francisco Flores enfrentó la primera muestra de repudio a las políticas que su gobierno ha impulsado. Ese día se registraron una serie de acciones de protesta en contra de las privatizaciones y del libre comercio. El hecho más destacado fue la toma de la Catedral Metropolitana.

na a manos de una veintena de jóvenes encapuchados. En el marco de una refriega iniciada entre la Policía y los manifestantes, algunos periodistas que cubrían los hechos —específicamente de la *Telecorporación Salvadoreña* y de *El Diario de Hoy*— fueron objeto de agresiones. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) condenaron inmediatamente los hechos. El director general del Seguro Social, Mauricio Ramos, vinculó a los manifestantes agresores con el FMLN; al mismo tiempo, diferentes instituciones gubernamentales, respaldando las aseveraciones del funcionario, aseguraron que los movimientos de médicos, sindicatos y estudiantes tendrían móviles políticos, en vista de las elecciones de marzo próximo.

A 24 horas de la toma del templo, el grupo de jóvenes ofreció una conferencia de prensa en la que plantearon sus demandas, de las cuales las más importantes eran la instalación de una mesa de negociación para discutir la crisis en el Seguro Social, compuesta por médicos y trabajadores del ISSS, el Obispo auxiliar de San Salvador, la Procuradora de derechos humanos y la intervención directa del Presidente de la República; y, segundo, un llamado a la “solidaridad y el auxilio” internacionales, a través de un pronunciamiento público que hiciera referencia a la “fragilidad de los acuerdos de paz, a la seguridad jurídica y a la democracia en el país”. El día 10, tras 72 horas de ocupación, los jóvenes encapuchados abandonaron las instalaciones del templo sin que hubiera autoridad que los detuviera.

Las empresas mediáticas no se quedaron de brazos cruzados luego de los hechos. En efecto, las agresiones en contra de los periodistas fue uno de los temas de discusión del encuentro de empresarios radiales denominado “Visión, consideraciones y aportes al tema de la sociedad de la información”, desarrollado del 14 al 15 de enero en San Salvador. Para el caso, una de las conclusiones del cónclave fue que “la radiodifusión privada e independiente es un instrumento de la libertad y la democracia, que fortalece el pluralismo y la difusión de ideas y opiniones, por lo que constituye una de las bases fundamentales para la sociedad de la información”, autoproclamándose así baluartes de la democracia.

En lo que al ámbito electoral concierne, durante el mes de enero, los partidos políticos preparaban su maquinaria proselitista de cara a los próxi-

mos comicios de marzo. De hecho, siendo que obtener buenos resultados es el principal objetivo de los partidos políticos salvadoreños y sus líderes, de lo que se ha tratado, desde el inicio del año, ha sido de convencer a los ciudadanos de que cada oferta política y cada candidato son lo mejor en su género, por lo cual cualquier intento de comparación entre candidatos y partidos carece de sentido. Es esta la idea que se halla detrás del abierto rechazo por parte de algunas cúpulas partidarias al debate y a la confrontación de proyectos entre los candidatos: no hay nada que debatir cuando se tiene la convicción de ser, en términos políticos, la única opción electoral viable para los salvadoreños y salvadoreñas.

Esta autosuficiencia —que no deja de estar teñida de un cierto color autoritario— se ha traducido no sólo en un desprecio hacia los adversarios políticos, sino en un desprecio a la inteligencia de los ciudadanos, a los que se ha creído poco merecedores de ver expuestas, como propuestas equivalentes, las distintas ofertas partidarias. Esta tendencia se ha acompañado de una no menos pernicioso: la superficialidad en las propuestas políticas, en respuesta a la poca atención prestada a los problemas reales que aquejan a los salvadoreños. Esta lógica ha conducido a que el sistema político salvadoreño se distancie cada vez más de la realidad social, ampliando la brecha entre la política y la sociedad.

Y es que sin la presión de tener que fundamentar unas ofertas que, de ser debatidas, serían sometidas al escrutinio ciudadano, partidos y candidatos han dicho durante enero las cosas más superficiales. Precisamente, lo más llamativo ha sido la superficialidad de lo ofrecido por la mayor parte de candidatos para atraer electores a su favor. Así, se ha hecho patente un peligroso divorcio entre la propaganda electoral y los graves problemas socioeconómicos que actualmente tiene el país y que marcarán sus tendencias en el mediano y largo plazo. No podían faltar en los meses previos a las elecciones los golpes bajos, las campañas sucias y los focos de violencia generados por enardecidos militantes de los diferentes institutos políticos. Con todo, el mes de enero iniciaba con la alcaldía capitalina en el centro de la atención. De hecho, dado que el futuro político del titular edilicio, Héctor Silva, peligraba luego del enfrentamiento sostenido con la cúpula efemelenista, las ofertas de otros partidos empezaron a tocar las puertas del emblemático alcalde. Una de ellas, la del Centro

Democrático Unido fue suficiente para asegurarse la continuidad en la vida política nacional, esta vez con serias posibilidades de convertirse en diputado de la Asamblea Legislativa.

Mientras el alcalde era recibido en el seno del CDU, sus expulsores, los efemelenistas afinaban su estrategia electoral para cambiar la imagen radical de algunos de sus dirigentes históricos, según revelara un matutino el día 8 de enero. El FMLN, dijo la prensa, se auxiliaría de asesores internacionales que le crearía una imagen positiva para recuperar el amplio margen de votantes indecisos. Por su parte, el 11, el partido gobernante realizó su asamblea general extraordinaria en la que ratificó la nómina de 162 candidatos a diputados propietarios y suplentes. Al día siguiente, el FMLN presentó, ante 300 convencionistas de los 19 municipios del Área Metropolitana de San Salvador, a sus cartas ganadoras para los comicios. Ese mismo día se confirmó la inclusión de Hector Silva en la nómina del CDU y su definitiva exclusión del FMLN.

El día 13, la candidata de ARENA a la alcaldía de San Salvador, Evelyn Jacir de Lovo, presentó a los miembros de su propuesta de concejo municipal, de quienes se destacó su escasa militancia dentro de las filas areneras. Ese mismo día, el CDU presentó a Héctor Silva, Héctor Dada Hirezi y Alberto Arene como candidatos a diputados de la Asamblea. El 15, ARENA dio inicio a la campaña de diputados desde el municipio de Izalco, en Sonsonate. El ex presidente de la República Alfredo Cristiani, quien liderara la concentración, declaró que "estamos nuevamente en peligro. Nuestro adversario, el FMLN, ya dijo que quiere una sociedad como Cuba". Los efemelenistas hicieron lo suyo concentrándose en la Plaza Barrios, en la ciudad capital e igualmente arremetieron en contra de sus adversarios areneros. Otros institutos políticos, como el PCN, PDC y PPR, celebraron el inicio de la campaña mediante concentraciones más bien modestas. El día 19, el CDU presentó su oferta legislativa que incluye los siguientes tópicos: reforma de la salud sin privatización; creación del empleo agrícola; descentralización de los recursos y una reforma política que elimine los compadrazgos y comercio de votos.

El 24, los partidos participantes en la contienda se comprometieron ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a desarrollar una campaña electoral de altura, evitando las confrontaciones físicas

entre los militantes, en respuesta a los hechos de violencia en los que resultó asesinado un militante del FMLN. Finalmente, el 29 de enero, el rotativo La Prensa Gráfica reveló los resultados de una encuesta en la que daba el gane al candidato del FMLN y actual alcalde de Nueva San Salvador, Óscar Ortiz, en la disputa por el gobierno de ese municipio. Con un 37.4 por ciento de opiniones favorables, Ortiz se alzaba sobre el legislador arenero, Rodrigo Ávila, que acumuló un 24.9 por ciento de opiniones a su favor. El estudio reveló además que la delincuencia es el principal problema que enfrentan los habitantes de Nueva San Salvador, municipio estrechamente relacionado a la capital.

Volviendo al denodado apoyo que el gobierno de Francisco Flores ha recibido en los foros internacionales —gracias, en gran parte, a la imagen de país que ha fabricado en el exterior—, el secretario adjunto de la OEA, Luigi Einaudi, destacó que la reunión del Comité Interamericano Contra el Terrorismo, celebrada en San Salvador del 22 al 25 de enero, obedeció al reconocimiento internacional del país, luego del "cumplimiento" de los acuerdos de paz de 1992. En efecto, la realización de la cumbre en el país despertó nuevamente el olfato publicitario de los círculos oficiales, desde los cuales no se tuvo el suficiente tino para considerar una definición menos laxa de terrorismo.

De hecho, las esferas oficiales salvadoreñas no se han escapado del discurso prevaleciente desde los bárbaros ataques contra el Centro de Comercio Mundial en Nueva York que tiende a hacer del terrorismo un problema difuso. Y es que sin la poderosa motivación ideológica que daba el fantasma del expansionismo soviético, el terrorismo —después de los ataques del 11 de septiembre de 2001— puede ser confundido con cualquier cosa, desde el narcotráfico hasta el trasiego de armas. La Declaración de San Salvador, documento que emanó del citado cónclave, se hace eco de ese concepto peligrosamente laxo de terrorismo. Y en virtud de ello, los actos de terrorismo se confunden con otros fenómenos: narcotráfico, migración ilegal, tráfico de armas, lavado de dinero, entre otros. Así, cualquier tipo de acto violento o delictuencial ha tendido a ser llamado terrorismo, perdiéndose de vista lo que caracteriza a este fenómeno.

En aquél discurso, el terrorismo se ve como una agresión "en contra de los valores y principios de los países amantes de la paz", como ha dicho el propio Einaudi, citando palabras del ex canciller

canadiense John Manley. Pero aquí hay otro error que también trae consecuencias graves. Porque lo grave del terrorismo no reside en que ataque "valores y principios" in abstracto, sino porque ataca el derecho a la vida de personas concretas. El terrorismo es condenable por cuanto pretende buscar un fin político valiéndose del irrespeto a la vida. Cualquier cosa podría ser sospechosa, y no sólo la delincuencia común. También las muestras de descontento social. Hace unas semanas, un ex comandante guerrillero, transformado del día a la noche en analista político, argumentaba que los médicos huelguistas practican el terrorismo al protagonizar acciones de protesta en las calles.

Por su parte, en la Conferencia citada, también entraron en la cuenta los llamados "delitos cibernéticos", que cubren una serie de actividades ilícitas, desde el espionaje —que puede ser espionaje entre compañías, y no necesariamente político—, hasta el sabotaje —como por ejemplo, lo que hacen muchos hackers, distorsionando el contenido de páginas de Internet—. El concepto de terrorismo se ha pervertido interesadamente, de tal manera que ahora terrorista puede ser el que ejerce sus derechos civiles como cualquier adolescente adicto a las computadoras que comete un acto vandálico vía Internet.

Como la noción actualmente imperante de lucha contra el terrorismo se ha basado en la mera sospecha (cualquier empleado migratorio o de aerolíneas en Estados Unidos puede detener a un viajero cualquiera simplemente porque su aspecto o sus gestos le parecen extraños), todo tiende a legitimar la suspensión de derechos y garantías, tanto de grupos como de individuos. Lo anterior muestra cómo se ha relativizado el concepto de terrorismo, mientras se ha generalizado el modo de combatirlo. Así, se justifican tanto las capturas arbitrarias como la "guerra preventiva" contra naciones que podrían ser terroristas. Este discurso calza perfectamente con el tratamiento que el gobierno de Flores ha dado a los conflictos sociales emanados del descontento ciudadano. Y es que dicho discurso le ha llevado a las posturas más inflexibles ante las crecientes demandas del sector salud, por ejemplo. De las elecciones, pues, nos encaminamos a la irresuelta crisis de la salud, en la cual las claras alusiones al "terrorismo" no han faltado.

El 5 de enero, el vicepresidente de la República, Carlos Quintanilla, expresó que la figura de un

mediador internacional en la crisis de la salud era "totalmente absurda", dando por sentado que la misma podría solucionarse por la voluntad de los actores nacionales. En respuesta a las declaraciones del gobernante, los médicos en huelga propusieron que la iglesia católica asumiera ese papel. El día 6, médicos de la Comisión Tripartita revelaron que la senadora demócrata estadounidense, Liz Figueroa (de origen salvadoreño), era la persona que desde el 29 de diciembre se manejaba como la mediadora internacional. Días después, el movimiento huelguístico describe una tensa calma. El 18 de enero, mientras la huelga cumplía cuatro meses de vigencia, el arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, afirmó que las negociaciones se encontraban estancadas desde mediados de diciembre, debido a que las partes, gobierno y médicos, "no tienen verdadera voluntad de negociar".

El 27, un matutino nacional reveló algunos comentarios vertidos por el director general del ISSS, Mauricio Ramos, que provocarían revuelo entre el gremio médico: "Hemos alcanzado recuperar entre un 92 por ciento y un 94 por ciento de la atención a los usuarios que nos visitan, por eso creemos que estamos muy cerca de lograr la normalidad", indicó. Los médicos desestimaron las declaraciones del funcionario y anunciaron nuevas medidas de presión para hacer sentir sus demandas. El mismo día de esa publicación, en palabras que denotan resignación, uno de los impulsores de la huelga, el secretario general del SIMETRISSS, Isaías Cordero del Cid, expresó que "ganamos una gran tranquilidad de conciencia. Cuando la gente no tenga cómo acceder a los hospitales, yo por lo menos voy a poder decir que me opuse a que privatizaran la salud en el país".

Hasta finales de enero, de acuerdo a informes periodísticos, unos 40 médicos residentes, de los 138 que se encontraban en huelga, habían regresado a sus labores en la institución. El 29, elementos de la Policía Nacional Civil desalojaron la clínica de Santa Anita, una de las más importantes de la red del Seguro Social, ocupada por los sindicalistas. En el operativo fueron capturadas 21 personas. Ese mismo día, las autoridades del ISSS declararon sin efecto el movimiento huelguístico; no obstante, los galenos afirmaron que la huelga se mantenía en pie. El 30, los sindicalistas abandonaron pacíficamente la última clínica del Seguro que mantenían en su poder. Sin embargo, la huelga

continuó, presta a cumplir cinco meses de haber iniciado.

Otro problema de graves implicaciones sociales que tuvo que enfrentar la sociedad salvadoreña a inicios del año fue la violencia social que, en contraste con el gran interés que despertó en la opinión pública, no fue objeto de discusiones serias y determinantes para su combate. A finales de 2002 y durante las primeras semanas de enero, más de una veintena de personas fueron asesinadas salvajemente en diferentes puntos de San Salvador y sus alrededores. Los titulares de la prensa escrita fueron elocuentes: "Asesinan a minuterero y dejan siete huérfanos", "Pandilleros lapidan a tres jóvenes en centro", "Asesinan joven en estado de gravedad", "Niña muere al explotar granada", "Hallan a otra mujer mutilada", "Pandilleros asesinan 8 personas en un día". Según la versión de las autoridades policiales y judiciales —cuyo punto de vista fue secundado por los grandes medios informativos—, tales hechos se explicarían por las enconadas rivalidades entre pandilleros de distintas "maras".

Así, el proceder de los pandilleros respondería, de acuerdo a la opinión más extendida, a una especie de violencia "importada", es decir, la aprendida en las grandes ciudades estadounidenses y que llegara a nuestras tierras por la vía de la deportación. Tal versión no es del todo falsa —sobre todo por el creciente número de inmigrantes infractores deportados en los últimos años—, pero cae en el riesgo del simplismo y la irresponsabilidad. La solución, para los señores de la justicia salvadoreña: el escarmiento público y el posterior encarcelamiento en los centros penitenciarios nacionales, verdaderas escuelas de delincuencia.

Esta ha sido la excusa preferida de las instituciones correspondientes para no ahondar en el asunto. Así se explicó el asesinato —y hasta mutilación en algunos casos— de hombres, mujeres, niños y jóvenes en diferentes partes del territorio nacional. El asesinato de una menor de edad, ocurrido el 14 de enero en San Salvador, habría sido originado, de acuerdo a la versión policial, a rencillas entre las rivales mara "Salvatrucha" y "Dieciocho". Ese mismo día, fueron encontrados los restos de una mujer mutilada en el Río Acelhuate de la ciudad capital. En respuesta a ello, el 24, la Policía capturó a seis cabecillas de la pandilla "diesiocho", a quienes se responsabilizó del asesinato y mutilación de al menos tres mujeres jóvenes en esos días. Entre el 26 y el 27 de enero,

ocho personas habrían sido asesinadas por pandilleros en diferentes puntos del país.

En ese orden, el día 27, uno de los pandilleros detenidos burló a sus custodios y escapó de las celdas que le detenían. La fuga del pandillero causó la destitución del jefe policial de Soyapango, Rodolfo Canjura, y una investigación en el referido puesto policial. Al final se concluyó que uno de los agentes policiales había permitido la fuga del recluso, dejando mal parada a la institución que se ufana de haber acabado con el crimen organizado en El Salvador. El día 28, el director de la Policía, Mauricio Sandoval, afirmó que impulsaría la creación de una ley especial antipandillas, en respuesta a la creciente actividad delincinencial. Adicionalmente, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Salvador Samayoa, consideró que a la creación de una normativa especial debía añadirse el control de los deportados y la creación o refuerzo de programas de asistencia social.

No está demás subrayar que lo anterior coincidió con el ambiente artificial generado por los círculos oficiales ante el retiro de la ONU. En este marco, el hecho de que uno de los pandilleros capturados —tras un impresionante operativo policial— haya escapado con facilidad de las instalaciones policiales puso en duda ante los observadores internacionales la supuesta "efectividad" de la Policía Nacional Civil. Además, los hechos cobraron importancia de primer orden debido a la realización del encuentro regional dedicado a discutir el combate del terrorismo, actividad de la cual se ha vanagloriado el cuerpo policial salvadoreño. Así, barbarie, terrorismo, violencia y elecciones formaron un polinomio de peligrosas consecuencias en la coyuntura actual. La confusión, los malos entendidos, la manipulación y el manoseo se abrieron paso ante la impotencia de una sociedad acostumbrada a lidiar cada día con la violencia y los desmanes de la clase política.

Por otro lado, la cuestión del TLC con Estados Unidos o CAFTA, por sus siglas en inglés —acaso el más importante tratado comercial en la historia de El Salvador y el que marcaría inexorablemente su futuro próximo—, ha sido ampliamente comentada por la prensa salvadoreña. Curiosamente, la expectativa generada en los sectores sociales, políticos y económicos centroamericanos contrasta con la escasa información sustantiva disponible que dé cuenta de la marcha real de las negociaciones. Los mismos negociadores locales

adolecen la falta de información, pero eso no ha sido suficiente para que disminuya su entusiasmo al respecto. En enero, los estadounidenses, pero principalmente los centroamericanos, han trabajado para preparar el contexto político de las negociaciones. A la vez, han cabildeado la búsqueda del financiamiento para sostener el proceso de negociación, tocando las puertas de organismos internacionales como el BCIE, el BID y la OEA. Del tratado mismo ha habido más bien un avance modesto, pues, tras la primera ronda de negociaciones, realizada en San José de Costa Rica, los negociadores a duras penas han comenzado a familiarizarse con los aspectos comerciales.

Desde los primeros días de enero, la prensa nacional hacía eco de las declaraciones de funcionarios clave en las aspiraciones salvadoreñas. Tal es el caso del embajador salvadoreño en Washington, René León, para quien, según una publicación del 4 de enero, "todo el contexto político internacional en que Estados Unidos, por su calidad de primera potencia del mundo está involucrado, refuerza la necesidad de ese país de tener aliados, de tener zonas de seguridad, de prosperidad compartida en la cual puedan hacer negocios sus ciudadanos, sus inversionistas, sus empresas y de aquellos que son sus socios más importantes". Seguridad y democracia, pues, para hacer negocios. Más tarde, el 11 de enero, el mismo León cerraba el círculo: "El TLC no se trata de aranceles únicamente y de disciplinas comerciales o de disposiciones para regular flujos de inversión, éste se trata de consolidación de la democracia, del estado de derecho; en el TLC están las esperanzas de desarrollo de la región, trata sobre crear condiciones que eviten los flujos migratorios desordenados". Comercio para el desarrollo y la democracia.

Como quiera que sea, los medios informativos presagiaban un decidido apoyo internacional para los centroamericanos. Así, el 8 de enero, mientras se daba desde Washington el arranque formal de las negociaciones, Robert Zoellick, representante comercial de Estados Unidos, manifestaba que su gobierno había destinado 47 millones de dólares para fortalecer la capacidad comercial de la región centroamericana. En la misma línea, la Organización de Estados Americanos (OEA) anunciaba que ese organismo había orientado un paquete no reembolsable de 7 millones de dólares para el mismo destino. No obstante el entusiasmo oficial, la apertura de las negociaciones estuvo acompañada

de protestas de organizaciones en El Salvador: esa mañana —como se reseñara algunas líneas arriba—, sindicalistas y miembros de organizaciones ciudadanas bloquearon importantes vías en la capital salvadoreña. Ese día se produjo además la toma de la Catedral Metropolitana.

Esas dos escenas contrapuestas —por un lado, los delegados centroamericanos en Washington, "con sus valijas repletas de ilusiones", según la irónica expresión del rotativo costarricense *La Nación*, y por el otro, un movimiento social cuestionando activamente el TLC— ilustran la dinámica que ha acompañado —y seguirá acompañando— a un tratado signado por la polémica y el verticalismo de los gobiernos encargados de implementarlo. Los escollos parecían dejarse venir sobre el tan ansiado sueño de los negociadores centroamericanos. El 21, salieron a la luz pública más problemas: las finanzas, la productividad y la competitividad. En todos ellos, los centroamericanos aparecían con déficit preocupantes.

Una nota periodística aparecida ese día en *La Prensa Gráfica* consignaba que "Centroamérica dice estar dispuesta a cumplir con las medidas de seguridad que Estados Unidos le ha exigido para la exportación de productos de cualquier aduana, puerto o aeropuerto, pero asegura enfrentar un problema: el financiero". Ese mismo día, en un encuentro sostenido por el comisionado del servicio de Aduanas de Estados Unidos, Robert Bonner, y sus homólogos centroamericanos, el gobierno de Estados Unidos pidió a éstos que mejoren sus niveles de productividad. De acuerdo con un estudio del BID, los puertos centroamericanos, entre éstos, los salvadoreños y los nicaragüenses, son considerados de los más ineficientes del continente.

Con todo, el 27 de enero daba inicio, en San José, la primera ronda de negociaciones. Más trabas se avizoraban. Tras el segundo día, los representantes del sector de telecomunicaciones de El Salvador —dominado por inversionistas europeos— expresaron su temor de que el TLC les perjudique debido a la apertura total del mercado salvadoreño a las inversiones estadounidenses. Dicho sector hizo públicos sus temores reiteradamente. Al final, la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones les dio su palabra de que no resultarían afectados en el marco del TLC. Salvo este sector que hizo oír sus demandas, el resto de sectores sociales salvadoreños ha aparecido al margen de las discusiones. Ni siquiera los diputados han te-

nido el tino suficiente como para involucrarse, directa o indirectamente, en las mesas de negociación.

Como quiera que sea, la cuestión del diálogo no parece ser una estrategia privilegiada por el gobierno de Francisco Flores a la hora de definir el rumbo del país. De ahí que sea preciso afirmar que, sin temor a equivocaciones, el CAFTA ha expresado la virtual imposibilidad del diálogo entre los gobiernos, interesados desmesuradamente por firmar el tratado a toda costa, y las organizaciones de la sociedad civil, que han impugnado proyectos como este, o el Plan Puebla-Panamá. El diálogo, se ha dicho, necesita como punto de partida un consenso sobre los términos en discusión. Tanto los apologistas como los impugnadores del CAFTA afirman que sus posiciones benefician a sus respectivas sociedades. Los primeros entienden por beneficio social el aumento de las ganancias de las industrias y los comercios que manejan. Con esto, asumen que automáticamente habrá más puestos de trabajo y así disminuirá el desempleo y la pobreza. En cambio, los detractores del libre comercio afirman que el beneficio de las sociedades pasa por garantizar primero las condiciones de subsistencia de las poblaciones. Ciertamente, la poca relevancia que el tema del desarrollo humano ocupa en esas iniciativas, da para sospechar.

En consecuencia, en enero se hicieron patentes dos posiciones encontradas ante el CAFTA: los partidarios del tratado aseguran que esta es la vía privilegiada para alcanzar el beneficio máximo de las sociedades —entendido en términos de desarrollo económico—, mientras que los opositores al tratado basan su oposición por cuanto estiman que su puesta en marcha lesionará los derechos laborales, económicos, culturales y sociales de la población, amén de la sostenibilidad ambiental. Los primeros cifran sus esperanzas, además, en que el CAFTA solucionará de una vez y para siempre el histórico problema de la integración regional. No se trata de un mero asunto de percepciones. Existen hechos que fundamentan el recelo hacia el CAFTA. El más evidente es la disparidad de condiciones que encuentran los agricultores del istmo hacia sus pares de Estados Unidos. Mientras el CAFTA eliminará las restricciones arancelarias vigentes en Centroamérica, la agricultura estadounidense goza de considerables subsidios.

Esto deja mal parados a los agricultores locales e incluso pone en peligro la viabilidad de las eco-

nomías centroamericanas. Lo más primario de esas economías —la producción de granos y cultivos básicos— estaría enfrentado a un competidor mucho más avanzado tecnológicamente y que gozaría de todas las ventajas y de ninguna restricción. El peligro de una crisis generalizada de seguridad alimentaria no es peregrino, sobre todo si se recuerda la hambruna padecida este año en las zonas rurales de Nicaragua, algo nunca antes visto, y el grave impacto de la sequía en el oriente salvadoreño, dos años atrás. El tema de la producción agrícola ha sido precisamente el punto oscuro de la reunión de Washington. En esa atmósfera de euforia propagada por los responsables de la economía centroamericana, fueron los productores del campo quienes han mostrado más escepticismo sobre los pretendidos beneficios del tratado con la primera potencia mundial.

Todo este rodeo pretende explicar por qué no existe diálogo sobre el libre comercio: los interlocutores parten de premisas distintas. Si los puntos de partida no son similares, puede darse cualquier tipo de intercambio, pero no diálogo. Ello permite ver las causas del fracaso de los pretendidos mecanismos de participación de proyectos como el CAFTA o el Plan Puebla-Panamá. Por lo tanto, lo que cabe esperar es que las negociaciones del CAFTA seguirán tal como está previsto, sin tomar en cuenta los aportes de los interlocutores de la sociedad civil. En contraposición a esta práctica de exclusión, el discurso oficial de los impulsores del CAFTA —y de las demás iniciativas tendientes a la construcción del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA— ha sido el de la apertura al diálogo con la sociedad civil. Ante los cuestionamientos sobre la inexistencia de diálogo, los partidarios del CAFTA afirman que el tratado tiene mesas de consulta.

Esto conduce a la cuestión del principio: los interlocutores no pueden entrar en un diálogo horizontal, por cuanto no cuentan con la misma información. Prácticamente, solo uno de los interlocutores sabe a qué atenerse, pues tiene todas las bazas bajo su manga, mientras que el otro no puede menos que alimentar las sospechas y el recelo. Y esto lo admitió en la reunión ministerial preparatoria del ALCA, celebrada en la ciudad de Quito en noviembre pasado, una importante figura, a la que no puede acusársele de *globalifóbica*: Se trata del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Enrique Iglesias. En suma, la ausencia de

diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil ante el inexorable paso del CAFTA abona el terreno para el escepticismo. De éste a las reacciones violentas, que no se han hecho esperar, no ha habido más que un paso.

Durante el mes de febrero, los asuntos arriba expuestos experimentan leves modificaciones y continuaron ocupando los espacios informativos. Por un lado, los negociadores del TLC acudieron con entusiasmo a la segunda ronda de negociaciones en Estados Unidos y regresaron con un sabor agri dulce al haber recibido poca información sobre el contenido del tratado. Nuevamente, los medios informativos alimentaron desde sus espacios ese entusiasmo artificial. Por otro lado, dada la proximidad de los comicios de marzo, los partidos políticos y sus candidatos afinaron sus propuestas y pasaron del total divorcio de los problemas de los salvadoreños a las grandes soluciones, a las ofertas irrealizables y a las palabras grandilocuentes.

Las acusaciones mutuas subieron de tono al calor de la campaña electoral y las encuestas de opinión han seguido evidenciando una sintomática apatía ciudadana que podría llevar al absentismo. A la par, el Tribunal Supremo Electoral se ha mostrado incapaz de cumplir con el calendario que él mismo se había trazado y las irregularidades en el padrón electoral no hacen más que alimentar el escepticismo ciudadano ante el proceso electoral. Finalmente, la agenda social salvadoreña continuó siendo relegada de la agenda nacional por la creciente atención de la clase política y las esferas económicas en la campaña electoral y las negociaciones del CAFTA, respectivamente.

La crisis de la salud ha sufrido este efecto de retardación. La huelga en el Seguro Social cumplió su quinto mes y las partes no parecen mostrar la voluntad de solucionarla. Por el contrario, el gobierno y la dirección del ISSS se ha enfrascado en una campaña de desprestigio en contra de los sindicalistas y los médicos que aún se mantienen en huelga; estos últimos han contraatacado haciendo señalamientos de corrupción que pesan sobre funcionarios públicos —entre ellos el ministro de Salud, José López Beltrán— y con más protestas en las calles de San Salvador. Todo se ha mezclado en el enrarecido ambiente electoral y se ha desviado totalmente del objetivo legítimo: la reforma del sistema de salud.

El 6 de febrero, durante la quinta “marcha blanca”, médicos, trabajadores sindicalistas y

miembros de organizaciones civiles y del FMLN recorrieron algunas arterias de la capital con el objetivo de evidenciar el seguimiento de la huelga. “Al movimiento lo quieren detener con capturas y demandas puestas por la ANEP, pero no será tan fácil”, expresó ese día el presidente del Colegio Médico, Guillermo Mata. Hasta el 7 de febrero, 255 médicos habían regresado al Seguro Social, mientras unos 500 empleados de esa institución aún se mantenían en huelga, de acuerdo a un informe del ISSS. El mismo detalla que el plan contingencial impulsado desde el año pasado habría tenido un coste de 5 millones 700 mil dólares.

El día 17, miembros de la Comisión Tripartita de médicos aseguraron tener pruebas que involucran al ministro de Salud, José López Beltrán, al ministro de Trabajo, Jorge Nieto, y al subdirector del ISSS, Emilio Velasco, en actos de corrupción cometidos en diferentes épocas. Según los galenos, aprovechando un estado de emergencia, López Beltrán habría negociado con el ISSS la adjudicación de los servicios de cirugía de ojos a una clínica de la cual es directivo. Con tales acciones, el ministro habría violado la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública que prohíbe a funcionarios públicos y municipales —y parientes hasta de un segundo grado— ser sujetos de licitación con el Estado. El director del ISSS, Mauricio Ramos, se negó en reiteradas ocasiones a brindar declaraciones sobre el caso. Por su parte, algunos diputados del FMLN aseguraron que citarían al ministro de Salud para que diera explicaciones ante la Asamblea Legislativa. López Beltrán dijo sentirse seguro de que había procedido amparado por las leyes salvadoreñas.

El día 20, el presidente Flores salió en defensa de su ministro y aseguró que éste actuó apegado a la ley. Bastó con esas declaraciones para que la prensa moderara su tono. Ese mismo día, sindicalistas del Seguro Social acompañados por miembros de organizaciones sociales irrumpieron violentamente en las instalaciones administrativas del ISSS, en San Salvador, provocando daños materiales. Posteriormente, agentes de la Policía procedieron al desalojo de los sindicalistas. Esas acciones —y el consecuente repudio ciudadano de la violencia— contribuyeron a legitimar la campaña de desprestigio orquestada desde la dirección del ISSS en contra del gremio médico que no tuvo espacios para deslindarse de las acciones de violencia. Y es que uno de los logros de esa campaña es haber reducido a la oposición civil —aunque

fuera liderada por profesionales de la medicina— a un grupo de sujetos violentos, cuyas acciones rozan el terrorismo.

La imagen de sujetos enardecidos dañando la propiedad privada ha circulado por todo el territorio nacional, alimentando el descontento ciudadano y la pérdida de apoyo a una causa que aparece desdibujada en un mar de acusaciones y campañas sucias. Con ella, se ha perdido la oportunidad de fiscalizar el trabajo de los funcionarios de gobierno —aunque tengan el rango de ministros—. El hecho de que la Corte de Cuentas haya ordenado iniciar investigaciones en el Seguro Social, como se lee en una nota periodística aparecida el 23 de febrero, no garantiza que la verdad se conozca en este y otros casos en que se dejan ver indicios de corrupción.

Con todo, el caso del ministro de Salud no fue el único que salió a la luz pública durante febrero. Como queriendo comprometer las aspiraciones de los adversarios políticos en los próximos comicios, uno a uno fueron desfilando casos de irregularidades en la administración pública. El primero de ellos involucra a dos empresas de capital español que negociaron proyectos con ANDA durante la administración de Carlos Perla. El 6 de febrero, el ministro del Medio Ambiente, Walter Jokisch, declaró que las empresas españolas ganadoras de la licitación para Revisiones Técnicas Vehiculares (ICASUR e Inceysa) presentaron estados financieros diferentes a los reales durante el proceso de adjudicación, con lo cual se habrían beneficiado para ser contratadas por el Estado. En respuesta a ello, representantes de las empresas aludidas alegaron que en el proceso no se registraron irregularidades. Posteriormente, ICASUR fue señalada por anomalías administrativas en otro proyecto concesionado por ANDA. Durante el mes, la prensa dio seguimiento al caso sin que se determinara responsabilidad penal alguna.

En otro caso, durante la segunda semana de febrero, los dos matutinos de mayor circulación hicieron de dominio público una investigación periodística en la que señalaban serias irregularidades en la empresa de capital canadiense CINTEC, que, junto con los alcaldes efemelenistas del Gran San Salvador, tienen a cargo la administración del relleno sanitario de Nejapa, proyecto emblema de la alcaldía capitalina. *El Diario de Hoy* dedicó sendos espacios a lo que consideraba una de las mayores investigaciones periodísticas realizadas

en el país. De acuerdo a otro rotativo, la *Fiscalía* ya había empezado una investigación para determinar la responsabilidad de CINTEC. Los alcaldes efemelenistas se mostraron sorprendidos por los resultados de la investigación.

El 11, el presidente Flores increpó a las alcaldías sobre las supuestas irregularidades: “Las alcaldías que firmaron ese contrato deben responder ante los ciudadanos”, acotó. Por su parte, el presidente de CINTEC desmintió enérgicamente las acusaciones que los matutinos levantaron en contra de la empresa canadiense mediante un comunicado fechado el mismo 11 de febrero. El funcionario adelantó que presentaría en El Salvador una demanda en contra de los medios acusadores. Días después, el embajador de Canadá en El Salvador respaldó, sustentado en pruebas legales, la inversión de CINTEC en el país.

El 14 de febrero, el matutino *La Prensa Gráfica* publicó los resultados de una auditoría de la Corte de Cuentas a la alcaldía de Soyapango —administrada por el FMLN—, en la que se detalla que unos 13 mil dólares provenientes de las arcas municipales fueron utilizados para financiar las protestas que la comuna realizó en contra del Anillo Periférico el año pasado. El informe detalla además que, con el aval de la actual alcaldesa, Marta de Rodríguez, y el candidato efemelenista a alcalde, Carlos Ruiz, se erogaron unos 500 dólares para financiar el viaje de tres activistas del FMLN a Guatemala y otros servicios para ese partido político. Salvo algunos comentarios más bien desagradables de la actual alcaldesa, el mismo medio no publicó defensa alguna de la administración edilicia. Finalmente, el día 18, el concejal de la alcaldía capitalina y dirigente del Movimiento Renovador, Facundo Guardado, acusó al actual edil, Héctor Silva, de haber encubierto a varios alcaldes efemelenistas que habrían pretendido beneficiarse con recursos públicos provenientes del proyecto de manejo de basuras. Las acusaciones de Guardado contribuyeron a la creciente anarquía que se experimenta en la alcaldía capitalina en vistas de la proximidad de los comicios de marzo.

Fue imposible deslindar los señalamientos de corrupción de la campaña electoral que durante el mes se mostró en pleno apogeo. Como ya se señalara arriba, los partidos políticos y sus candidatos se dieron a la tarea de afinar sus plataformas legislativas y las propuestas municipales. Lo característico de esta etapa de la campaña ha sido no solo la

insistencia de los candidatos en problemas gruesos del país —pobreza, desempleo, inseguridad ciudadana, delincuencia, basura y salud, entre otros—, sino su compromiso de hacerles frente y resolverlos. Ha parecido, entonces, que la realidad nacional terminó por imponerse en las agendas de los candidatos y los partidos. De la evasión se habría pasado, pues, al compromiso con los problemas más agobiantes de los salvadoreños. Precisamente, la campaña electoral ha abundado en propaganda, pero con una penuria de propuestas, situación que no sería tan alarmante de no ser por los ingentes problemas que tienen acorralada a la sociedad salvadoreña entre la frustración y la desesperanza. Habría que distinguir, pues, entre propaganda y propuestas.

Algunos de los problemas más acuciantes se incorporaron a la campaña, pero lo han sido más al nivel de propaganda que de propuestas. Por un lado, esos problemas han sido abordados de forma superficial por figuras políticas que muchas veces parecen no saber bien de lo que hablan. Expresiones como “erradicación de la pobreza”, “seguridad ciudadana”, “generación de puestos de trabajo”, “atención a la juventud” y “combate al crimen” se han escuchado a diario en los distintos espacios mediáticos en la boca de candidatos de todos los colores y adscripciones políticas. En la mayoría de los casos, se ha tratado de frases hechas; las exposiciones más detenidas han sido más la excepción que la regla. Y, cuando esto ha sucedido, no todo ha sido argumentación bien fundamentada; antes bien, la superficialidad ha sido lo característico en el discurso político más elaborado.

Además de abordar como temas de propaganda problemas socioeconómicos que deben ser asumidos en el plano de las propuestas, los candidatos y los aparatos publicitarios a su servicio han “inflado” imprudentemente su capacidad (y compromiso) de hacerles frente y resolverlos. Es decir, han ofrecido más de lo que efectivamente pueden hacer desde los puestos de poder que aspiran alcanzar a través del mandato popular. Así, no ha sido inusual escuchar a candidatos a alcalde que ofrecen terminar con la delincuencia, la pobreza y la crisis en el sistema de transporte público o candidatos a diputado que hayan prometido mejorar la calidad de la educación, moralizar a la sociedad y combatir eficazmente el crimen organizado. A guisa de ejemplo, el día 4, el FMLN dio a conocer un plan en el que se estipula el incremento de las

cotizaciones al Seguro Social para los salarios arriba de 685 dólares, en vistas de la reforma del sistema de salud. Con ello el partido de izquierda estaría prometiendo hacer pagar más a los más ricos de El Salvador, cuestión casi imposible.

Las palabras grandilocuentes contrastan con la dura realidad: el día 11 de febrero, el magistrado del TSE, Roberto Edmundo Viera, dejó entrever que el TSE no contaba con la capacidad para garantizar una total transparencia en las elecciones del 16 de marzo. “Ninguna de las elecciones anteriores ni la próxima tienen algún grado de transparencia”, expresó al funcionario. La prensa hizo eco de algunas de las anomalías aún no superadas: la posibilidad de emitir dos carnés electorales para la misma persona, la inscripción de menores de edad y la presencia de unos 50 mil fallecidos en el padrón electoral vigente. A ello se suma que el TSE incumplió a lo largo del proceso los plazos que él mismo se trazó con antelación. En ese orden, el FMLN señaló otras anomalías que merecen atención: entre otras, que el TSE realizó cambios del lugar de votación de manera antojadiza, que funcionarios utilizan recursos del TSE para hacer proselitismo y que al menos 24 menores de edad fueron registrados en el padrón y luego sacados del registro.

Ese mismo día 11, la Universidad Tecnológica (UTEC) presentó su última encuesta en cuyos resultados el candidato del FMLN para la alcaldía de San Salvador y su contendiente arenera aparecen virtualmente empatados en las intenciones de voto. Jacir de Lovo tuvo un 25.71 por ciento de opiniones favorables, frente a un 25.04 por ciento de su contrincante, Carlos Rivas Zamora. La UTEC concluyó también que el partido gobernante se haría de 24.16 por ciento de los votos válidos para la Asamblea Legislativa, frente a un 23.32 por ciento del FMLN.

Finalmente, el 14, el partido ARENA protagonizó un nuevo capítulo en el señoreamiento de la clase empresarial dentro de su cúpula partidaria. Tras la renuncia de Francisco Bertrand Galindo del máximo órgano de dirección, el COENA, el empresario Ricardo Poma fue llamado a la cúpula arenera. El presidente de la misma, el banquero Archie Baldocchi, habría autorizado desde Estados Unidos el cambio en la dirigencia. Tal acción valió la crítica del ex presidente de la República, Armando Calderón Sol, quien comentó que los empresarios habían tomado el control de la cúpula, relegando a otros sectores nacionales. De nuevo,

el presidente Flores intervino desvirtuando las críticas de su correligionario para calmar los ánimos en el seno del partido en el poder.

El 26 de febrero, mientras el presidente Flores expresaba desde España el aval de su gobierno a una intervención militar estadounidense en Iraq, la Universidad Centroamericana (UCA) revelaba los resultados de su última encuesta de opinión antes de los comicios de marzo. En los resultados se registra que “el 50.3 por ciento de los salvadoreños tiene poco o ningún interés en las elecciones municipales y legislativas del próximo 16 de marzo”. Además, los resultados del sondeo muestran que “sólo un 30.2 por ciento de los ciudadanos cree que las elecciones serán limpias. Mientras que el 48.2 por ciento de los salvadoreños consideran que habrá fraude y uno de cada cinco no sabe si éstas serán transparentes o no”.

Respecto de las preferencias partidarias, el sondeo de la UCA reveló que “el 23 por ciento manifiesta identificarse con el partido ARENA, mientras que el FMLN reúne el 13.3 por ciento de las preferencias a nivel nacional, el PCN logra el 5.2 por ciento de identificación partidaria, el 3.8 dice que se identifica con el PDC y el 2.2 por ciento con el CDU”. Sobre las intenciones de voto para la Asamblea Legislativa nuevamente ARENA se alza sobre el FMLN. Finalmente, la UCA señaló un virtual empate en las intenciones de voto por la alcaldía capitalina: “El 29.1 por ciento de los capitalinos afirmó que votaría por el FMLN, mientras que el 28.4 por ciento dijo que lo haría por ARENA. Un 4.2 por ciento votaría por la coalición (PDC-MR-AP-PSD) y el resto de partidos no alcanzan a obtener más del 3.2 por ciento. Sin embargo, un 19.3 por ciento no declaró su intención de voto y un 15.9 por ciento manifestó que no votará por partido alguno”. La tendencia de las encuestas ha apuntado, pues, a una cerrada lucha por la municipalidad capitalina, bastiónpreciado por los partidos políticos en contienda y, por otro lado, un desinterés de la ciudadanía respecto del proceso electoral.

En lo que a la dinámica económica se refiere, el único asunto fuera del CAFTA que aglutinó importantes esfuerzos fue el de la crisis del café. En ese marco, los integrantes del denominado Foro del Café (productores independientes, cooperativas de café e instituciones como la Fundación para el Desarrollo, FUNDE) presentaron el día 10 de febrero una nueva propuesta al gobierno de Fran-

cisco Flores para hallar la solución a la crisis social y económica de las fincas de café en el país. De acuerdo a un vocero de FUNDE, se habría pedido al Ejecutivo declarar estado de emergencia en las zonas cafetaleras para luego abordar tres problemas concretos.

El primero, “frenar la gran cantidad de intervenciones bancarias en las fincas”; el segundo, hacer frente a las “necesidades alimenticias y de salud” que padece la población relacionada a las zonas cafetaleras, debido a la falta de empleo; y, tercero, con la declaratoria de emergencia, reactivar las fincas mediante el otorgamiento de créditos frescos. En esa línea, el Foro pidió al gobierno un fondo de 350 millones de dólares para financiar un período de gracia de cinco años del Ficafé —fondo vigente en el sector— y para llevar recursos frescos a los productores y reactivar el empleo en las fincas. No obstante, debido a las prioridades económicas del Ejecutivo en la actual coyuntura, las peticiones no hallaron la respuesta esperada, con lo cual los problemas sociales y económicos de las regiones cafetaleras tendrán que esperar mientras, paradójicamente, el gobierno negocia el libre comercio para el desarrollo.

En suma, en enero y febrero quedó patente que la negociación del CAFTA ha relegado la agenda social de las prioridades del gobierno. Ni siquiera ha habido estudios serios que evalúen el impacto socioeconómico del tratado. Sin más, es difícil cuantificar con exactitud el coste social de un eventual Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero sí es fácil darse cuenta que ésta ha sido una cuestión más bien marginal en las negociaciones que centroamericanas y estadounidenses han sostenido durante los dos primeros meses del año. La mayoría de las mesas de negociación —cooperación; solución de controversias y asuntos interinstitucionales; compras del sector público y propiedad intelectual; ambiente y laboral; acceso a mercados; y servicios e inversión— se centran en asuntos estrictamente comerciales —y las que no, se supeditan a lo comercial—. De igual manera, el debate suscitado en El Salvador, a propósito de las maratónicas negociaciones, hace poco eco de lo que significará para la sociedad salvadoreña un acuerdo de esa envergadura, en tiempos en que el libre comercio se convierte en el fin y no en un instrumento para el desarrollo de las naciones.

A lo anterior debe añadirse el hecho de la escasa disponibilidad de información en los medios de

comunicación y otros espacios que den cuenta del rumbo de las negociaciones, situación que responde, en gran parte, a las condiciones impuestas por el equipo negociador estadounidense. De hecho, este último suele imponer el ritmo y los términos del proceso de negociación, y uno de sus lineamientos es mantener un hermetismo tal que la información que se filtre hacia los círculos extra-oficiales sea mínima. Lo poco que se sabe, por la vía de los medios informativos, se refiere más bien a cuestiones formales y detalles de menor importancia (cuántos negociadores conforman cada equipo, indicadores económicos ya conocidos por otras fuentes, etc.).

Así, un escaso interés en investigar sobre el impacto del CAFTA —por la parte gubernamental y por el lado de la sociedad civil— sumado a la poca disponibilidad de información fiable y pertinente, se han conjugado en detrimento del montaje de un debate nacional en el que se discuta las repercusiones del tratado comercial. Por el contrario, al gobierno de Francisco Flores, renuente a escuchar opiniones divergentes en asuntos trascendentes para el país, lo que le ha resultado favorable es guardarse información vital y así evitar a toda costa la emergencia de sectores que comprometan el proceso de negociación. De ahí que la sorprendente celeridad de éste tenga como una de sus componentes evitar toda clase de debate nacional en los países participantes en el mismo.

Es indudable que la vigencia del CAFTA cambiaría el mapa social salvadoreño. En primer lugar, por la naturaleza excluyente del tratado y la ausencia de medidas de compensación social y económica. Los grandes ganadores locales del TLC serían los que han logrado abrirse espacio en el mercado estadounidense, es decir, quienes concentran la riqueza nacional y tienen la capacidad productiva necesaria para hacerle frente a la competencia regional. Los pequeños empresarios y productores —a la sazón, los más golpeados por los recurrentes desastres naturales— difícilmente podrán resistir la competencia. A ello se suma la inminente invasión de productos importados de menor costo —sobre todo, agrícolas— y la consiguiente quiebra de los productores locales ya sumidos en crisis. Viejo temor afincado en las pequeñas economías centroamericanas, frente a la economía más poderosa del mundo, temor que no carece de fundamento alguno.

En segundo lugar, la apertura desmesurada —que en primer término es comercial, pero que luego vulnera todo el tejido social— causaría un ingente impacto en las regiones más vulnerables del país. La desvinculación de los polos de desarrollo nacional —concentrados en algunas zonas urbanas— con el resto del país se traduciría en una desmejora de las condiciones de vida de quienes habitan estas últimas regiones. No se avizora, como cabría esperar, el desarrollo a corto plazo de las regiones tradicionalmente marginadas de El Salvador, de modo que la brecha entre pobres y ricos disminuya. Por el contrario, contrastando con la celeridad de la negociación del TLC, los planes de desarrollo local contenidos en el Plan de Nación —por mencionar el esfuerzo de consulta más grande realizado en la historia reciente del país— han sido lanzados al abandono por el actual gobierno.

En tercer lugar, dado que en el marco de los TLC se fomenta la libre circulación de mercancías, pero se restringe cada vez más la libre movilidad de personas —lo cual resulta contraproducente, pues potencia los flujos migratorios ilegales— se vislumbran más trabas migratorias tanto para los compatriotas ilegales en Estados Unidos como para quienes decidan exponerse al rosario de peligros en la búsqueda de mejores condiciones de vida en aquel país. Esto último coincide con un momento en el que en nombre de la lucha contra el terrorismo se limitan toda clase de libertades individuales. Se sacrifica, pues, la libertad individual en el altar del libre comercio y la lucha contra el terrorismo —de cualquier signo que éste sea—. Con la entrada en vigencia del TLC se vaticina un crecimiento de la emigración ilegal hacia Estados Unidos, en respuesta a la pobreza y exclusión social que se agudizaría fundamentalmente en las zonas rurales —en las plantaciones de café, por ejemplo—.

Finalmente, cabe especular, la sociedad salvadoreña experimentaría una agudización de sus problemas estructurales (pobreza, exclusión social, violencia, corrupción y desempleo) y problemas de alcance continental (narcotráfico, lavado de dinero, trasiego de armas, polución ambiental, etc.) en respuesta a un proceso de apertura para el cual no se encuentra preparada. La ausencia de políticas sólidas de desarrollo humano permiten vislumbrar un futuro nada halagador, según las condiciones con que el tercer gobierno de ARENA está

llevando el rumbo del país. En términos económicos, por ejemplo, contrasta que mientras El Salvador se posiciona como una de las economías más libres de América Latina, aparece en los últimos lugares de competitividad y productividad.

No obstante lo anterior, no parece que los salvadoreños se hayan dado cuenta de la importancia de un tratado de esa naturaleza para el futuro del país. Aunque sería irresponsable demonizar sin más los Tratados de Libre Comercio, pues acarrear algunos beneficios que no se pueden ocultar, la manera en que se negocian, los términos con que se suscriben y la vigencia de los mismos sí que merece una discusión de alcance nacional. No se trata de un mero acuerdo comercial más, sino de algo que afectará inexorablemente al futuro próximo de El Salvador. De la manera en que se negocie, se suscriba y se eche a andar, dependerá el futuro de las nuevas generaciones de salvadoreños.

De una forma irresponsable, el gobierno de Flores está poniendo en juego el porvenir de toda una nación, haciéndole creer que es lo mejor para ella. Todos aquellos que opinen lo contrario entran en los dominios del terrorismo, el comunismo o el fanatismo; por tanto, lo menos que se puede hacer es ignorarlos. Con todo, parece que Flores y su gobierno les tienen miedo a los ciudadanos organizados. Por esta razón, no se promueven debates ni espacios en los que se discuta un asunto tan importante para el país.

Ni el Ejecutivo salvadoreño —que ha tomado la negociación de los TLC como principal estan-

darte— ni los diferentes actores interesados —que en principio deben involucrar a todos los salvadoreños— se han sentado a evaluar el impacto socioeconómico de un eventual TLC con Estados Unidos. Al contrario, el primero ha cerrado filas a favor del hermetismo y los segundos se han desatendido, ocupados en una campaña electoral que —sin pretender desdeñar la política— puede consumir energías vitales necesarias para un debate nacional que dé como resultado una verdadera evaluación de lo que el TLC signifique para El Salvador en términos económicos y sociales.

La cuestión política no puede ser más optimista. En su afán de ganar votos a como dé lugar, candidatos y partidos de todos los colores políticos han banalizado los problemas y las situaciones que afectan vitalmente a la mayoría de ciudadanos. Pocos son los líderes políticos que se han hecho cargo, con seriedad, de los desafíos económicos, sociales y políticos que tiene planteado El Salvador en la actualidad. En su mayoría, partidos y candidatos han asumido problemas y situaciones graves con un propósito meramente propagandístico. Los debates, foros y encuentros promovidos por instituciones de la sociedad civil, con el afán de forzar a los candidatos a sincerarse con los ciudadanos, se han usado como espacios gratuitos de propaganda, perdiéndose la oportunidad de desarrollar una cultura de evaluación pública de quienes van a ocupar puestos de mando en el aparato del Estado. La ausencia de propuestas, entre tanto, sigue siendo el talón de Aquiles de la mayor parte de candidatos y partidos.